

Marcelo Casals:

# “«Gobierno firme» no necesariamente significa autoritarismo o arbitrariedad”



Por Martín Romero E.

**H**ace unos ocho años, el historiador Marcelo Casals (Santiago, 1983) quería escribir un libro sobre el apoyo social a la dictadura. Como suele ocurrir en estos casos, el camino se desvió un poco. El resultado final fue «Contrarrevolución, colaboracionismo y protesta. La clase media chilena y la dictadura militar» (Fondo de la Cultura Económica, 2023), un texto crítico y lúcido que se eleva por encima del pobrísimo debate sobre los 50 años del golpe.

En 374 páginas, este licenciado y magister en Historia en la UC, doctor en historia latinoamericana por la U. Wisconsin-Madison y académico de la Universidad Finis Terrae, aborda el tránsito de la clase media (y las organizaciones sociales que se identifican con ellas, como los colegios profesionales o los pequeños empresarios) desde una oposición contra la UP, pasando por una aprobación inicial a la dictadura, hasta una abierta oposición al régimen de Pinochet.

Esa relación —guardando todas las proporciones del mundo— entre la ciudadanía y la búsqueda de un gobierno que asegure autoridad, volvió a la discusión tras los resultados de la última encuesta CEP. Allí un 66% de las personas consultadas se mostró a favor de que “en vez de tanta preocupación por los derechos de

El historiador y académico de la U. Finis Terrae, en medio del fuerte respaldo a conceptos como la seguridad y la autoridad, dice que “‘gobierno firme’ y ‘derechos de las personas’ no son antónimos”.

las personas, lo que este país necesita es un gobierno firme”.

**“Es una situación difícil para la izquierda”**

—¿Cómo ves este ánimo que se ha extendido en la ciudadanía? El porcentaje no es menor.

—Habría que ver primero cómo está formulada la pregunta o las opciones de respuesta, porque es evidente que, en principio, “gobierno firme” y “derechos de las personas” no son antónimos. De hecho, la condición de posibilidad de la “firmeza” de un Gobierno es que su acción sea legítima, y esa legitimidad está dada por el respeto al marco jurídico que regula acción del Estado, incluyendo en

primer lugar los derechos de los ciudadanos. Ese principio tan básico suele no ser entendido por el campo conservador chileno, como quedó en evidencia en la acción represiva policial durante el estallido social.

—¿Esto nos vuelca necesariamente hacia formas de autoritarismo que limiten los derechos de las personas? Aldo Mascareño decía en una entrevista en «La Tercera», que “un gobierno firme no significa que la gente quiere volver a la dictadura o tener un Bukele”.

—Estoy de acuerdo con Aldo. Dejando de lado a aquellos grupos más radicalizados y que se identifican con la ultraderecha local, lo cierto es que un “gobierno firme” no necesariamente significa autoritarismo o arbitrariedad en el ejercicio de la violencia estatal como en los casos de la dictadura chilena o el régimen salvadoreño. Esto merece más investigación y análisis, pero es posible que esa demanda por “gobierno firme” tenga que ver con una exigencia por más y mejor Estado, tanto en materia de seguridad como en el funcionamiento y cobertura de las prestaciones estatales. En ese sentido, es posible que sea una continuidad con respecto a las demandas del estallido social, ahora en clave más conservadora y enfocada en seguridad y orden público.

—Desde un punto de vista especulativo si quieres: ¿qué es lo que a esta altura se entenderá por “gobierno firme”?

**Es claro que toda una nueva generación no vivió los horrores de la dictadura y quizás ese término signifique otra cosa.**

—No estoy seguro si esto tiene que ver con una cuestión generacional, toda vez que la memoria y sus disputas son también transferibles a aquellos que no tuvieron experiencia directa de los acontecimientos rememorados. “Gobierno firme” puede significar distintas cosas para distintas personas, desde aquellos con nostalgias autoritarias, bastante mitologizadas por lo general, hasta quienes sencillamente demandan un funcionamiento más eficiente del Estado. Es evidente que el Estado está sumergido en una crisis importante, que antecede a este Gobierno, en relación a su capacidad de incidir en el orden social, ya sea en materia de seguridad, que parece ser lo más importante ahora, pero también en salud, jubilaciones, educación, procesamiento de conflictos en el sistema político, etc. Por razones que se podrían discutir, el Estado ni siquiera tiene capacidad fiscalizadora significativa del orden económico. Si “gobierno firme” es entendido como un Estado que intervenga de manera decisiva en la satisfacción de necesidades sociales o en los abusos del sistema económico, yo estaría plenamente de acuerdo.

—¿Esto representa un “giro a la derecha”? Uno tiene la sospecha de que este ambiente beneficia más a Kast y a republicanos que a la derecha tradicional.

—Todo lo anterior no quita que haya un aumento de tendencias autoritarias en segmentos significativos de la población, que es una de las consecuencias propias de crisis hegemónicas como las que estamos viviendo ahora. Es algo equiparable, en ese sentido, a lo que Chile vivió en los años 1920 y 1930, cuando también proliferaron tendencias autoritarias de distinto signo, desde el ibañismo al nacional-socialismo local, entre tanto otros. Y es evidente que esto beneficia electoralmente a quienes de manera demagógica más explotan la situación, como Kast y los republicanos. Queda por ver, eso sí, cuáles van a ser las consecuencias para ese sector si el Consejo Constitucional fracasa en su misión de crear una nueva Constitución, porque ese sería un fracaso de los republicanos en lo que es, de hecho, su primera responsabilidad política de relevancia. Hasta el momento, siempre se han beneficiado de la cómoda posición de ser oposición a todo, de Piñera a Boric.

—En este contexto: en una entrevista a este diario hace un tiempo, decías que la “derecha tradicional no quiso ni pudo establecer ningún tipo de ‘cordón sanitario’” con José Antonio Kast. Con este estado de cosas, uno no ve dónde Chile Vamos pueda diferenciarse mucho de republicanos. ¿Cómo lo ves tú?

—Creo que es algo que la “derecha tradicional” aún está definiendo, y no creo que hayan consensos muy claros hasta el momento. Los sectores más moderados y liberales quieren despegarse de la ultraderecha, mientras que otros suponen que para evitar ser tragados por los republicanos tienen que radicalizar su retórica y parecerse a ellos. La derecha tradicional aún está buscando la solución para este dilema y es posible que en ese camino encuentren más de una dificultad para mantener la unidad de la coalición. Pero más allá de cualquier especulación al respecto, la verdad se verá en el terreno electoral, cuando la opción republicana vuelva a perfilarse como opción presidencial. ¿Apoyará la derecha tradicional a la ultraderecha en pleno como lo hicieron en la última elección, o levantarán una opción de unidad con otros sectores para evitar el alud ultraderechista?

—¿Cómo queda la izquierda en un contexto como este? Has sido muy crítico de la capacidad de la izquierda de conectar con las necesidades populares en tiempos de crisis. Está claro que el Gobierno ha hecho un esfuerzo en materia de seguridad y orden público, pero también es evidente que aquello no ha sido percibido como suficiente.

—Es una situación difícil para la izquierda, y eso algo que se arrastra al menos desde el estallido social. No tienen herramientas doctrinarias e ideológicas para interpretar la realidad, y han tenido que correr tras los acontecimientos sin un mapa muy claro. Haber llegado al Gobierno en un contexto de desplome del orden político de la transición agudizó eso, porque la urgencia era y sigue siendo



Es posible que esa demanda por ‘gobierno firme’ tenga que ver con una exigencia por más y mejor Estado (...) Es posible que sea una continuidad con respecto a las demandas del estallido social”.



El Gobierno, desde una posición de debilidad política, intenta difundir un mensaje más ecuménico y diluido (por los 50 años), aunque eso también tensiona a la alianza de izquierda”.

la administración del Estado antes que construir consensos y redes políticas más amplias. Después vino el fracaso de la Convención, consecuencia también de esa pasmosa confusión doctrinaria. El esfuerzo en materia de seguridad es valorable, aunque es una función básica de todo Gobierno. El problema es que siguen siendo actitudes reactivas, que no participan de elaboración política más amplia. Como he dicho antes en este mismo diario, el nivel de debate propiamente político e ideológico en la izquierda sigue siendo muy bajo.

### “El debate no ha tenido un alto vuelo intelectual”

—¿Habría que sorprenderse de este deseo de un “gobierno fuerte”? En principio es un sentimiento que parece haber estado presente muchas veces a lo largo de la historia: 1932, 1952, 1973.

—En efecto, es un sentimiento que emerge en distintos momentos y contextos, muchos de ellos marcados por crisis políticas o más generales. También es un recordatorio que la hegemonía de la democracia como horizonte normativo fundamental de la política moderna es relativamente reciente y más o menos frágil. Con una experiencia autoritaria refundacional y reciente en nuestras espaldas deberíamos tenerlo presente.

—Te lo pregunto porque uno de los grandes aciertos de tu último libro es hacer patente que el golpe de Estado no fue una cosa estrictamente militar y elitaria. Hay una clase media que apoyó fuertemente el golpe. ¿Hay amplios sectores que se entregan, de cuando en cuando, a cierto autoritarismo?

—Sí, aunque no tiene que ser entendido como una fatalidad. Hay condiciones sociales específicas que ayudan a entender esos cambios de comportamientos sociales, como durante la Unidad Popular, algo que investigo en mi último libro. La tarea de la historia es precisamente avanzar interpretaciones de esos fenómenos antes que juzgarlos, algo que por lo general bloquea comprensiones más acabadas.

—A propósito del debate por los 50 años del golpe. ¿La dictadura, al menos en sus primeros años, tuvo una legitimidad social importante? Una de las cosas que me quedó de tu libro es la referencia que haces a la celebración del primer aniversario del golpe con una multitudinaria manifestación en el parque Bustamante.

—Tuvo un apoyo social importante, aunque imposible de cuantificar con exactitud. Para entender ese fenómeno tenemos que analizar el período previo, el gobierno de Allende y la UP, en el que se desarrolla una enorme movilización contrarrevolucionaria que lleva a la calle a muchas personas y organizaciones que no tenían experiencia de protesta. Todo eso marcó profundamente las subjetividades de muchos individuos, quienes suponían que estaban luchando por su propia sobrevivencia social. Puestas así las cosas, para ese bloque social contrarrevolucionario hete-

rogéneo, el golpe y la dictadura eran su salvación, y por ende la apoyaron con fervor.

“De más está decir que ese apoyo no equivale necesariamente otorgarle ‘legitimidad’ al golpe o a la dictadura, que desde un punto de vista jurídico no lo tenía, por lo que tuvo que inventar su propia legalidad. Eso ya es parte del debate social sobre los legados de la dictadura, y es importante llegar al consenso de que toda solución de fuerza, como un golpe o una dictadura, son salidas inaceptables para una vida en común civilizada”.

—¿No es tampoco nueva una cierta sociología de la violencia en la ciudadanía? En la lectura de tu texto me queda claro que la represión posgolpe fue un dato de la causa, nada muy censurable, al menos al principio. Lo mismo se podría decir, obviamente guardando las proporciones, con lo visto después del 18-O. En un comienzo la gente no se vio muy perturbada por la violencia de las calles.

—Investigar la reacción social ante el enorme despliegue de violencia represiva luego del golpe sirve para entender cómo fue posible que ocurriesen esos hechos. También hay que mencionar el hecho de que, al menos al principio de la dictadura, la represión era visible para el que la quisiera ver, tanto en las calles o en centros de detención semi-públicos como el Estadio Nacional. Los periódicos oficialistas de entonces —incluyendo a «La Segunda»— daban a conocer en sus páginas la magnitud de la represión, presentándola como la consecuencia “natural” de una “guerra”, o simplemente escondiéndola tras montajes mediáticos. Sólo con la emergencia del paradigma de los Derechos Humanos y su expansión por la sociedad civil, esa violencia represiva empezó a ser vista como censurable en términos morales, algo fundamental para entender la horadación del apoyo social a la dictadura que lleva, crisis económica mediante, a las jornadas de protesta nacional de los años 1980.

—¿Cómo has visto el debate en torno a los 50 años? El nivel de la discusión, a veces, hace que uno quiera que lleguen rápido las fiestas patrias.

—No es extraño que el debate, salvo algunas excepciones, no tenga un alto vuelo intelectual, porque son momentos de reedición de luchas por la memoria que implican subjetividades golpeadas o polarizadas por la historia chilena del último medio siglo. El Gobierno, desde una posición de debilidad política, intenta difundir un mensaje más ecuménico y diluido, aunque eso también tensiona a la alianza de izquierda, como lo demostró la salida de Patricio Fernández de su rol de coordinador. En la derecha no se perfila aún una posición coherente, pero la crispación de los ánimos y cierto sentimiento de impunidad han dado pie a reivindicaciones de la dictadura que a esta altura deberían ser inaceptables. Allí, creo, está la piedra de tope para la construcción de una derecha política verdaderamente moderna y democrática.